

“Dossier Internacional

ELECCIONES EN AL: DINERO OPACO EN LAS URNAS

Economías ilegales, del narcotráfico a la minería, pasando por el lavado de activos, están afectando las campañas en los países de la región, no sólo con financiamiento, sino incluso imponiendo candidatos



Por Ángel Hugo Pilares
El Comercio/GDA

En América Latina, el crimen organizado descubrió que la política puede ser una inversión más rentable que una ruta de droga, que un socavón ilegal o una red de contrabando. Y no es sólo recurrir a la política de “plata o plomo” con autoridades electas. Cada vez más, las economías ilegales buscan intervenir antes: financian campañas, imponen candidatos, controlan territorios o capturan instituciones desde adentro.

Esta investigación del Grupo de Diarios América (GDA) muestra un patrón regional. Aunque con formas distintas en cada país, la lógica es la misma: las economías ilegales han dejado de ser actores externos al sistema político y, en varios casos, participan activamente en la competencia electoral. El narco sigue siendo el principal motor de esa infiltración, pero ya no actúa solo. La minería ilegal, el lavado de activos y la corrupción en la contratación pública han ampliado el mapa de riesgos.

México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina y El Salvador muestran señales de penetración criminal en la política. Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen como excepciones parciales: países con menor evidencia de infiltración directa, con alertas que demuestran que ningún sistema está completamente blindado.

LA CAMPAÑA COMO INVERSIÓN CRIMINAL

México ilustra un cambio: antes las economías ilegales corrompían autoridades electas. Hoy inician antes el proceso de corrupción financiando campañas para garantizar lealtades. Según datos recopilados por EL UNIVERSAL, dos décadas de reformas para blindar las elecciones frente al crimen organizado han fracasado. Pactos políticos, nuevos sistemas de fiscalización y reformas legales no han impedido que las organizaciones criminales sigan infiltrando candidaturas y campañas. David Saucedo, consultor en seguridad, resume el fracaso

En México el uso de efectivo y gastos no declarados han sorteado las reformas.

CAMPAÑAS ELECTORALES EN LATINOAMÉRICA

Nivel de infiltración del crimen

■ Señales claras
■ Excepción parcial

MÉXICO

ECONOMÍA ILEGAL
Narcotráfico y crimen organizado territorial

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Reformas legales, fiscalización del INE y mesas de seguridad con Gobernación

EL SALVADOR

ECONOMÍA ILEGAL
Pandillas, lavado de dinero y financiamiento opaco

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Tribunal Supremo Electoral (TSE)

COSTA RICA

ECONOMÍA ILEGAL
Sin evidencia actual

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

REPÚBLICA DOMINICANA

ECONOMÍA ILEGAL
Narcotráfico, lavado de activos y corrupción

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Junta Central Electoral (JCE). El reporte menciona aportes, pero múltiples casos de sobornos y recursos no declarados

VENEZUELA

ECONOMÍA ILEGAL
Minería ilegal, narcotráfico y contrabando de combustible

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Formalmente fiscalizan el CNE y la Contraloría

BRASIL

ECONOMÍA ILEGAL
Narcotráfico (Comando Vermelho y PCC)

HERRAMIENTAS DE CONTROL
La ley sólo permite donaciones de personas naturales, no de empresas

COLOMBIA

ECONOMÍA ILEGAL
Narcotráfico, minería ilegal y corrupción en contratación pública

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Consejo Nacional Electoral (CNE), fiscalía y Misión de Observación Electoral (MOE)

PERÚ

ECONOMÍA ILEGAL
Minería ilegal (principal), además pesca ilegal

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Fiscalización mediante reportes obligatorios de campaña

CHILE

ECONOMÍA ILEGAL
Sin evidencia actual

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Servicio Electoral (Servel)

URUGUAY

ECONOMÍA ILEGAL
No se reportan vínculos comprobados entre narcotráfico y campañas

HERRAMIENTAS DE CONTROL
El reporte no describe un sistema específico de fiscalización electoral

ARGENTINA

ECONOMÍA ILEGAL
Narcotráfico, juego clandestino y lavado inmobiliario

HERRAMIENTAS DE CONTROL
No se detallan mecanismos formales de fiscalización electoral.

INJERENCIA CRIMINAL

En la región, la delincuencia descubrió que la política puede ser una inversión más rentable que una ruta de droga.

Fuente: Datos recopilados por diarios del GDA.

con crudeza: “Las políticas públicas que se han instaurado en México han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.

En Colombia, *El Tiempo* reporta una presión creciente del narco, la minería ilegal y la corrupción sobre el sistema electoral. La Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios en riesgo por fraude y violencia para las elecciones de este año, de los cuales 81 están en nivel extremo. El mapa coincide con territorios donde grupos armados y economías ilegales disputan control político y territorial.

En El Salvador, el problema es de debilidad institucional. *La Prensa Gráfica* recoge la advertencia de Acción Ciudadana sobre la fragilidad del sistema de fiscalización electoral. La organización sostiene que “la falta de fiscalización y transparencia permite la infiltración de financiamiento ilícito en la política”. Un magistrado electoral, bajo anonimato, advirtió incluso que “siempre existe probabilidad de que los partidos sean permeados por dinero ilegal”.

EL DINERO QUE NO APARECE

En países, el financiamiento ilícito rara vez entra de manera directa a una campaña, sino mediante em-

presas fachada, contratistas, testaferreros, aportes fragmentados, efectivo no declarado o donaciones en especie. Ese es el caso de Brasil. Según informa *O Globo*, facciones como el *Comando Vermelho* y el *Primeiro Comando da Capital* han encontrado formas de influir en la política aprovechando vacíos legales y recurriendo a terceros para mover recursos sin dejar rastros evidentes.

República Dominicana, según reportes de *Listín Diario*, muestra la convergencia entre narco, lavado y financiamiento político. El caso Calamar expuso un esquema de recaudación de dinero no declarado mediante presiones a contratistas estatales para financiar campañas. En Colombia, el problema tiene antecedentes históricos, desde el Proceso 8000 hasta la reciente sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022 por superar topes legales y recibir aportes prohibidos.

En Perú, *El Comercio* describe una modalidad distinta pero igual de opaca. Muchos candidatos declaran financiar sus campañas con recursos propios o simplemente no registran aportes, lo que dificulta conocer el origen real del dinero. El problema se agrava en un país donde la minería

170

MUNICIPIOS

en riesgo por fraude y violencia para este año, identificó la Misión de Observación Electoral en Colombia.

11,500

MILLONES DE DÓLARES

en un año movilizó la minería ilegal en Perú; muchos candidatos simplemente no registran aportes.

ilegal movilizó más de 11 mil 500 millones de dólares en un solo año.

En unos países, el recurso más valioso de economías ilegales no es el dinero, sino el control territorial. Brasil y México muestran esa dinámica. En Brasil la mayor herramienta es el control territorial. Carolina Grillo, investigadora de la Universidad Federal Fluminense, lo resume: “Prohíben a ciertos partidos hacer campaña o imponen candidatos”. En México, la violencia política se ha vuelto parte estructural de varios procesos

electorales, especialmente en zonas donde organizaciones criminales disputan rutas y territorios.

Colombia ofrece una versión más extrema. El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, atribuido por la Fiscalía a la disidencia Segunda Marquetalia, recordó que la violencia sigue siendo una herramienta eficaz para alterar la competencia política.

Según informa *El Nacional* de Venezuela, la relación en ese país entre economías ilícitas y política es estructural. En el Arco Minero del Orinoco y en estados fronterizos como Apure, Zulia y Táchira, minería ilegal, narcotráfico y contrabando operan en una lógica de captura estatal, donde la frontera entre poder político y economía ilegal se vuelve cada vez más difusa.

CUANDO EL CRIMEN COMPITE

En muchos lugares las economías ilegales no sólo financian candidaturas desde afuera, sino que colocan a sus operadores dentro del sistema político. Argentina ofrece casos reveladores. Según informes de *La Nación*, la Operación Sapucay expuso una red de narcotráfico en Corrientes con participación del inten-

DAVID SAUCEDO

Consultor en seguridad

Las políticas públicas que se han instaurado en México han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo"

ACCIÓN CIUDADANA

Asociación salvadoreña sin fines de lucro

La falta de fiscalización y transparencia permite la infiltración de financiamiento ilícito en la política"

dente de Itatí y su vice. En Santa Fe, el senador Armando Traferri fue señalado por la fiscalía como articulador político de una estructura vinculada al juego clandestino y al financiamiento ilegal.

En República Dominicana, *Listín Diario* documenta casi una veintena de casos de políticos vinculados al narco desde 2017, incluyendo diputados, alcaldes y regidores.

En México, las alertas se encendieron cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó, a fines de abril, a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de nexos con el *Cártel de Sinaloa*, incluyendo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo y es señalado de haber recibido apoyo de *Los Chapitos* en su campaña política. El gobierno mexicano exige al de EU pruebas sobre las acusaciones.

En Perú, la alarma gira en torno a la minería ilegal. *El Comercio* identificó 64 candidatos a senadores y diputados inscritos en el Reinfo, un registro cuestionado por servir como escudo para operadores ilegales.

EXCEPCIONES Y RIESGO

En Uruguay, *El País* no registra vínculos comprobados entre narco y campañas, aunque la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió sobre amenazas a operadores judiciales y posibles intentos de presión a legisladores y periodistas. Costa Rica —según *La Nación*— tampoco reporta nexos directos entre candidaturas y economías ilegales; el Tribunal Supremo de Elecciones abrió pesquisas preliminares sobre financistas por dudas sobre el origen de sus recursos.

En casi todos los países analizados, seguir la ruta del dinero es cada vez más difícil. Brasil enfrenta el uso de testaferros y aportes fragmentados; Colombia identifica terceros, empresas fachada y donaciones en especie; en Perú muchos candidatos declaran autofinanciar sus campañas o no reportan aportes; en México el uso de efectivo y los gastos no declarados han permitido sortear sucesivas reformas. En El Salvador, incluso un magistrado electoral reconoce que capacidades de fiscalización son insuficientes. El desafío no consiste sólo en impedir que el dinero ilícito entre a las campañas, sino en desarrollar instituciones capaces de detectarlo antes de que se transforme en poder político.

Las economías ilegales no financian campañas por afinidad ideológica. Buscan impunidad, control territorial, acceso a contratos públicos y capacidad para bloquear investigaciones. No se trata de donaciones de fuentes ilegales. Se trata de una deuda a futuro que ya está empezando a cobrarse. ●

**El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.*